

Mandatos de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

REFERENCIA:
AL ARG 1/2021

14 de enero de 2021

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, de conformidad con las resoluciones 41/17 y 41/6 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con **la ausencia de respuestas efectivas y oportunas por parte del sistema de justicia a múltiples denuncias de acoso y hostigamiento interpuestas por la Sra. Paola Estefanía Tacacho, derivando en su feminicidio.**

Según la información recibida:

La Sra. Paola Estefanía Tacacho vivía en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, Argentina, donde era profesora de inglés. En el año 2015, la Sra. Tacacho fue profesora en un establecimiento educativo de nivel terciario al que [REDACTED] asistía. Desde ese momento, fue hostigada, acosada y amenazada por el Sr. [REDACTED].

Entre el 2015 y el 2020, la Sra. Tacacho presentó 13 denuncias en contra de su agresor en los tribunales de la Provincia de Tucumán, acusándolo por violencia de género, amenazas y desobediencia judicial. Su familia presentó otras cuatro denuncias en Salta, su provincia natal.

En respuesta a la primera causa presentada por la Sra. Tacacho (Expte. 70722/2015), el poder judicial dictó la prohibición de acercamiento del agresor respecto a la Sra. Tacacho. Sin embargo, el Sr. [REDACTED] incumplió sistemáticamente la medida, lo que llevó a recurrentes denuncias por la Sra. Tacacho por incumplimiento de la orden judicial.

Las denuncias presentadas por la Sra. Tacacho fueron archivadas o quedaron sin resolución. En la única causa (Expte. 34121/2016) en que la fiscalía interviniente solicitó elevar el caso a juicio oral y público por desobediencia judicial de la medida de restricción de acercamiento, el juez de instrucción, Dr. [REDACTED], dictó el sobreseimiento del caso. El juez consideró que, a pesar de que existían pruebas del incumplimiento judicial, no ameritaba realizar un desgaste judicial por un delito como la desobediencia judicial.

En el 2018, la séptima causa presentada por la Sra. Tacacho, denunciando amenazas y el incumplimiento de la restricción de acercamiento (Expediente: 17997/2018) fue archivada por el fiscal interviniente, Dr. [REDACTED], bajo el

argumento que el Ministerio Público Fiscal no contaría con espacio físico y personal suficientes

A partir del 2016, la Sra. Tacacho cerró sus redes sociales y se mudó de domicilio para evitar o frenar el hostigamiento que sufría. Sin embargo, cada vez que ella hacía una denuncia, dejaba asentados sus datos personales en los documentos de las causas, incluyendo su casilla de mail y su celular personal. Dichos datos quedaban accesibles a la defensa del agresor, que volvía a ubicarla y continuaba hostigándola.

Por solicitud de la Sra. Tacacho, el 05 de junio de 2020 tuvo inicio un proceso de mediación en el Centro de Mediación Judicial. El procedimiento fue archivado el 27 de agosto de 2020, considerando que el agresor había sido diagnosticado por el psiquiatra tratante con una discapacidad total y permanente y por los antecedentes de violencia de género en el caso, dos causales de exclusión del proceso de mediación.

El 30 de octubre de 2020, el Sr. [REDACTED] asesinó a la Sra. Tacacho con un arma blanca, de numerosas puñaladas, y luego se quitó la vida con la misma arma.

Después del feminicidio y en respuesta a la amplia repercusión del caso, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo públicos cuatro informes, el primero del Cuerpo de Auditores donde se detallan las denuncias interpuestas por la Sra. Tacacho, un segundo informe del centro de Mediación, un tercer informe de la Oficina de la Mujer y un cuarto de la Oficina de Violencia Doméstica. La familia de la Sra. Tacacho ha pedido al poder judicial que se les facilite un informe oficial sobre el resultado de cada causa, pero aún no ha sido atendida su petición. La familia reclama que se investigue si el agresor recibió algún tipo de colaboración de terceros.

Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, quisiéramos expresar nuestra grave preocupación por la denegación de acceso de la víctima a la justicia, y la ausencia de medidas de debida diligencia para interrumpir una situación de violencia y prevenir el feminicidio de Paola Tacacho. A pesar de las repetidas denuncias presentadas por la víctima respecto al acoso, hostigamiento y amenazas que sufría, el sistema de justicia no respondió a sus reclamos, o lo hizo sobre la base de estereotipos de género sobre la violencia contra las mujeres, minimizando la gravedad de los hechos, culminando en un feminicidio que probablemente se hubiera podido prevenir. La falta de desarrollo e implementación de medidas de debida diligencia puede equivaler a discriminación y violencia contra la mujer y, por lo tanto, a una violación de las obligaciones internacionales del Gobierno de Su Excelencia bajo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Argentina en 15 de julio de 1985.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos**, el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidas de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvese proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvese proporcionar información en relación a las investigaciones en curso – así como los resultados, en caso de que estén disponibles – respecto al feminicidio de la Sra. Paola Estefanía Tacacho, en particular respecto a la posible responsabilidad de terceros que hubieran colaborado con el Sr. [REDACTED].
3. Sírvese proporcionar información en relación a las investigaciones en curso respecto a la responsabilidad de actores del sistema de justicia por los hechos.
4. Sírvese informar sobre las medidas adoptadas para incorporar una perspectiva de género en el análisis de denuncias sobre violencia contra las mujeres, así como asegurar la efectividad de las medidas de protección dictadas (como las restricciones de acercamiento).
5. Sírvese proporcionar información sobre las medidas para hacer efectivas las acciones de prevención, punición y sanción de la violencia de género, y en particular sobre la prevención del feminicidio, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022) y otras medidas relevantes.

Agradeceríamos recibir una repuesta en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de Su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de Su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de la situación de denegación de acceso a la justicia. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Dubravka Šimonovic
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias

Elizabeth Broderick
Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

Las expertas quisieran llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW, por sus siglas en inglés), en especial: el derecho a la igualdad y no discriminación (art. 2) que incluye el derecho a una vida libre de violencia, conforme ha concluido el Comité CEDAW, órgano revisor del cumplimiento de la Convención, en las Recomendaciones Generales Nos. 19 y 35; el derecho a ser protegida frente a la discriminación por el sistema de justicia (art. 2 lit. c) y a la igualdad y no discriminación por parte de las autoridades e instituciones (art. 2 lit. d.); la obligación de los Estados de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas que estén basados en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5 lit. a).

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer quisiera llevar a la atención del Gobierno de Su Excelencia el artículo 4 (c & d) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual afirma la responsabilidad de los Estados de proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. Con este fin, los Estados deben establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.

En ese sentido, las expertas quisieran señalar que el Comité CEDAW, en sus Recomendaciones Generales No. 19 (1992) y No. 35 (2017), establece que la violencia contra las mujeres menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales y constituye discriminación, tal como se entiende en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ya sea perpetrada por un funcionario del Estado o un ciudadano particular, en la vida pública o privada. Por lo tanto, el Comité considera que los Estados Partes tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para investigar todos los delitos, para castigar a los culpables y ofrecer una reparación adecuada sin demora. En la Recomendación General N ° 19, el Comité establece sanciones específicas, medidas de rehabilitación, prevención y protección que los Estados deben introducir para cumplir con esta obligación; en el párrafo 9, se deja claro que " los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas." La Recomendación General No.35 sobre la violencia de género contra la mujer, que actualiza la Recomendación General No. 19 subraya que los Estados partes deben contar con un marco jurídico y de servicios jurídicos efectivo y accesible para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer. Deben proteger a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer y velar por que tengan acceso a la

justicia y a una reparación efectiva. Esa reparación para la víctima o los familiares o dependientes de la víctima directa (en el caso de haber fallecido ésta), debería incluir diversas medidas, tales como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, y la satisfacción y garantías de no repetición. Tales reparaciones deben ser adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño sufrido (párrafo 33, c.). Las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas deberían ser accesibles para todas las mujeres, en especial para las afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación, tener en cuenta las necesidades concretas de sus hijos y otros familiares a su cargo, estar disponibles en todo el Estado parte y concederse independientemente de su condición de residentes.

Las expertas recuerdan al Gobierno de su Excelencia los dictámenes del Comité CEDAW en los casos *Goekce (fallecida) c. Austria* (comunicación núm. 5/2005) y *Yildirim (fallecida) c. Austria* (comunicación núm. 6/2005), en que ambas víctimas fueron asesinadas por sus esposos después de años de abuso brutal, así como el caso de *Ángela González Carreño c. España* (comunicación núm. 47/2012), en el que la hija de la denunciante fue asesinada por su padre (exesposo de la denunciante), luego de años de violencia contra ambas. A pesar de que en estos casos, las víctimas habían denunciado la violencia a la policía y habían obtenido órdenes de alejamiento, la falta de coordinación entre las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales dio lugar a una reiterada incapacidad para detener a los autores y velar por la seguridad de las mujeres. El Comité dejó claro en sus decisiones que la obligación del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica iba más allá de la promulgación de leyes. El Comité consideró que Austria y España, respectivamente, no habían actuado con la diligencia debida al no velar por que la ley se aplicara de manera adecuada, incluyendo las medidas de protección.

En su informe sobre el feminicidio o el asesinato de mujeres por razones de género (A/71/398), la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres definió el feminicidio como la matanza de mujeres en razón de su sexo o género. Según la Relatora, constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y la manifestación más violenta de discriminación y desigualdad de la mujer. El asesinato de mujeres por razones de género no es un fenómeno aislado que ha surgido súbita e inesperadamente, sino que representa la etapa final de violencia después de una situación prolongada e ignorada de violencia que se ha intensificado progresivamente.

La Relatora recordó la responsabilidad de los Estados respecto a la violencia contra la mujer perpetrada por agentes no estatales o por particulares, en virtud del artículo 2 e) de la Convención, que los obliga a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa. Este nivel de responsabilidad requiere la adopción y aplicación de medidas para proteger a las mujeres de la violencia por razón de género cometida por agentes no estatales y obliga a los Estados partes a contar con disposiciones jurídicas y un sistema para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer cometida por agentes privados. Esta obligación de diligencia debida exige que todos los agentes y órganos del Estado actúen de manera adecuada y con diligencia para prevenir, investigar, castigar y proporcionar reparaciones por actos de violencia por razón de género cometidos por particulares. El hecho de que un Estado no actúe con la diligencia debida para prevenir actos de violencia contra la mujer, cuando sus autoridades saben

o debieran saber que existe peligro de violencia, o para investigar y castigar esos actos constituye una violación de los derechos humanos.

En su informe sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas en la vida cultural y familiar, (A/HRC/29/40), el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas enfatizó que la violencia doméstica tiene importantes repercusiones en las mujeres, ya que provoca más muertes que durante las guerras civiles y acarrea costos económicos mucho más elevados que los asociados con los homicidios y las guerras civiles.